

Urbanismo | Son inquilinos de unos pisos municipales del barrio y exigen que se formalice un convenio que el Ayuntamiento les prometió hace dieciséis años, un acuerdo que les permitiría comprar las viviendas

Cincuenta familias de Miralbueno luchan por conservar sus casas



Uno de los vecinos enseña el contrato que demuestra el pago puntual del alquiler. J. M. MARCO

ZARAGOZA. No quieren que les echen de sus casas. Cincuenta familias del barrio de Miralbueno han solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que les permita mantener el alquiler o acceder a la compra de los pisos, municipales, en los que llevan viviendo dieciséis años. Más de cuarenta vecinos se entrevistaron ayer con el teniente de alcalde de Urbanismo, Rafael Gómez Pastrana, que se comprometió a estudiar la situación de los afectados.

Hace dieciséis años que cincuenta familias del barrio de Miralbueno, la mitad de ellas, de raza gitana, se trasladaron a unos pisos de alquiler de propiedad municipal, ubicados en

la plaza de Las Peñetas, animados por el Consistorio zaragozano. "Les convenía que dejáramos los pisos donde estábamos para construir otros para gente rica. Por eso, no dijeron que nos cedían éstos de alquiler", explicó Emilio Díaz, vecino de las viviendas.

Carencia de convenio

Según los vecinos, en aquel momento, el Ayuntamiento se comprometió a firmar un convenio, con el que se daba a los vecinos la opción de compra de los pisos a lo largo de los años. "Nos dijeron que con las 22.000 pesetas que pagamos cada tres meses servirían para ir amortizando el piso, pero este acuerdo



Un acuerdo verbal

■ El teniente de alcalde de Urbanismo, Rafael Gómez Pastrana, se ha comprometido a indagar sobre la validez del convenio, que en su momento, se realizó de forma verbal. Si se demuestra la veracidad del acuerdo, habrá que crear una Comisión de Trabajo para buscar las soluciones más adecuadas.

nunca se ha llegado a formalizar. Sin embargo tenemos contratos que demuestran que pagamos", criticó la presidenta de la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón, y vecina de las viviendas, Pilar Clavería.

Hace cinco meses, que los inmuebles pasaron a depender de la Sociedad Municipal de Rehabilitación (SMR), que ha comenzado a examinar las condiciones económicas de las familias. "Una asistente social nos evaluará el nivel de renta. Es una vergüenza", se quejó Manuela Galindo. Gómez Pastrana tranquilizó a los vecinos y aseguró que las comprobaciones por la SMR eran habituales.

CRISTINA FONTENLA